

Reflexiones urgentes sobre la Amazonía

Situación actual, riesgos y perspectivas

Síntesis del foro virtual
realizado el 19 de agosto de 2020

Reflexiones urgentes sobre la Amazonía

Situación actual, riesgos y perspectivas

Síntesis del foro virtual
realizado el 19 de agosto de 2020

CONTENIDO:

- Presentación 3
- El Arco Minero del Orinoco y el avance del extractivismo en la Amazonía venezolana 4
- Ciclos de expansión territorial de la agricultura capitalista en las tierras bajas de Bolivia..... 11
- Amazonía, pandemia y reactivación económica en el Perú..... 15
- La razón detrás de la locura: bolsionarismo en la pandemia..... 21

Director Ejecutivo CEDLA

Javier Gómez Aguilar

Coordinación

Silvia Molina Carpio (CEDLA)

Producción editorial

Unidad de Comunicación y Gestión de Información (CEDLA)

Edición

Patricia Montes R.

Diseño y diagramación

Jorge Olmos Durán

La Paz, Bolivia

La presente publicación está elaborada en el marco de la Coalición Regional por la transparencia y la participación conformada por la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y Conectas derechos humanos.

Presentación

En los últimos 25 años, la extracción de recursos naturales, la expansión de la frontera extractiva, de las explotaciones mineras y de hidrocarburos, así como del agronegocio, han sido una tendencia global en la que América Latina ha consolidado el modelo primario exportador y su dependencia de la renta de las actividades extractivas. En ese marco, el espacio amazónico, en su compleja diversidad ecosistémica, biológica, social, económica y cultural, se encuentra en permanente disputa y se enfrenta a presiones que buscan alcanzar rápidamente su subordinación al mercado.

En ese contexto y con el objetivo de agendar en el debate la situación y los riesgos actuales, además de las perspectivas futuras de la región amazónica —una de las últimas fronteras del capital—, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), la Coalición Regional y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) realizaron, en agosto de 2020, el evento virtual “Amazonía: Situación actual y perspectivas”. Esta actividad reunió a investigadores de cuatro países: Enrique Ormachea Saavedra, del CEDLA (Bolivia); Ernesto Ráez Luna, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (Perú); Emiliano Teran Mantovani, del Observatorio de Ecología Política de Venezuela y Fabio Luis Barbosa dos Santos, de la Universidad Federal de São Paulo (Brasil). Ellos analizaron la situación de cada uno de sus países y abordaron, desde ámbitos y contextos políticos diferentes y a la vez similares en sus políticas, las formas en que el poder del capital actúa sobre estos territorios, convergiendo en la importancia de que la Amazonía sea parte de la agenda pública y del debate regional amplio y con la participación informada de la sociedad.

Este boletín sistematiza los principales temas expuestos por los investigadores y busca contribuir al conocimiento de la realidad de la Amazonía sudamericana, territorio que se enfrenta a profundas transformaciones, y, de esta manera, llamar la atención sobre el riesgo de que los Gobiernos de los países amazónicos, junto con sus aliados empresariales y del sector financiero, usen a la “reactivación económica” y la normalización de la economía como excusa para arremeter con mayor fuerza contra el territorio amazónico.

Javier Gómez Aguilar
Director Ejecutivo
CEDLA

El Arco Minero del Orinoco y el avance del extractivismo en la Amazonía venezolana¹

Nos encontramos en una encrucijada como región y como planeta, y la opción no puede ser retomar o insistir en esa ‘normalidad’ expoliadora y depredadora. Es fundamental crear y promover espacios de confluencia de las diferentes luchas en las que se puedan tejer redes de acción, compartir visiones estratégicas y establecer algunos horizontes comunes.
Emiliano Teran Mantovani²

El análisis realizado a continuación parte del criterio de la Amazonía considerada como bioma o como biorregión. En Venezuela, esta biorregión comprende los tres estados venezolanos del sur del Orinoco: Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, como se observa en el mapa 1. Se trata de una región donde se ubican importantes parques nacionales y reservas de la biosfera que reúnen ecosistemas delicados actualmente en riesgo y donde habitan alrededor de 29 pueblos indígenas, tres de ellos en aislamiento voluntario o contacto inicial.

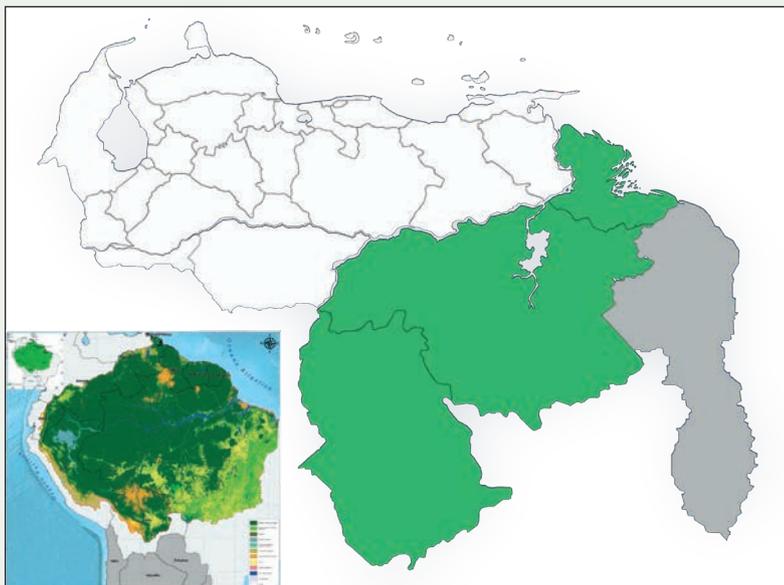
Las áreas protegidas y los territorios indígenas están en una zona fronteriza conflictiva, en la que existe una importante concentración de minerales; entre ellos destaca el oro, pero también el coltán³, diamantes, bauxita y hierro, junto con otros (ver mapa 1).

PROCESO BOLIVARIANO: EL SALTO HACIA LAS NUEVAS FRONTERAS DE LOS COMMODITIES

Para entender el extractivismo venezolano es importante tener una mirada que contraste la geografía política de las zonas petroleras con la de las zonas mineras. La historia venezolana

- 1 Este documento es una síntesis de la exposición “El Arco Minero del Orinoco y el avance del extractivismo en la Amazonía venezolana”, presentada por Emiliano Teran Mantovani, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela y miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, en el evento virtual “Amazonía: situación actual y perspectivas” realizado el 19 de agosto de 2020. Véase: <https://cedla.org/eventos/amazonia-situacion-actual-y-perspectivas/>
- 2 Emiliano Teran Mantovani (2020), “Los ritmos de la ‘nueva normalidad’: coordenadas del extractivismo en la pandemia en América Latina”. <https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/07/26/los-ritmos-de-la-nueva-normalidad-coordenadas-del-extractivismo-en-la-pandemia-en-america-latina/>
- 3 Mezcla de columbita y tantalita.

Mapa 1
Delimitación de la Amazonía venezolana



Nota: la Amazonía venezolana está señalada en verde. En la esquina inferior izquierda se puede ver el mapa de la PanAmazonía, según los límites fijados por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG).

Fuente: commons.wikimedia.

contemporánea ha estado centrada fundamentalmente en torno al norte del Orinoco, donde se han desarrollado los principales enclaves petroleros que han sido el centro de la economía del país. En la actualidad, la Amazonía es la nueva frontera de explotación; en esta región son evidentes determinadas transiciones del extractivismo histórico de los últimos cien años. Está inmersa en la lógica colonial de conquista del territorio amazónico, que se comparte en casi toda América Latina y que continúa en desarrollo.

El año 1999 llegó al poder en Venezuela un Gobierno con un perfil de izquierda nacionalista. En este nuevo periodo, el Gobierno bolivariano adoptó acciones y definió la reformulación de ciertas políticas. Al mismo tiempo, retomó otras relacionadas con el nacionalismo petrolero, manteniendo y potenciando el proyecto extractivista. En este proceso encontramos cuatro puntos de inflexión:

- El declive de las fuentes de crudo convencional, con lo cual adquiere mayor importancia el desarrollo de la Franja Petrolífera del Orinoco (FPO), que actualmente también sufre una crisis petrolera.
- El proyecto bolivariano desarrolla una reformulación del extractivismo, que se sostiene en el relanzamiento y repotenciación de todos los emprendimientos, en especial de la minería a nivel nacional, determinando cambios a mayor escala en la región al sur del Orinoco.
- El boom de los *commodities*, y en especial la subida del precio mundial del oro, genera la expansión de la minería ilegal hacia regiones como la amazónica. Esta expansión —resultado tanto del crecimiento en cantidad de zonas de explotación como de las formas y la sofisticación de los grupos que realizan esta minería— se da a una escala nunca vista en la historia de la Amazonía.
- A partir del año 2004 surgen intentos de formalizar la minería y los proyectos mineros. Son varias las acciones en esa dirección: se oficializa el Decreto N° 3110, de 2017, que regula la

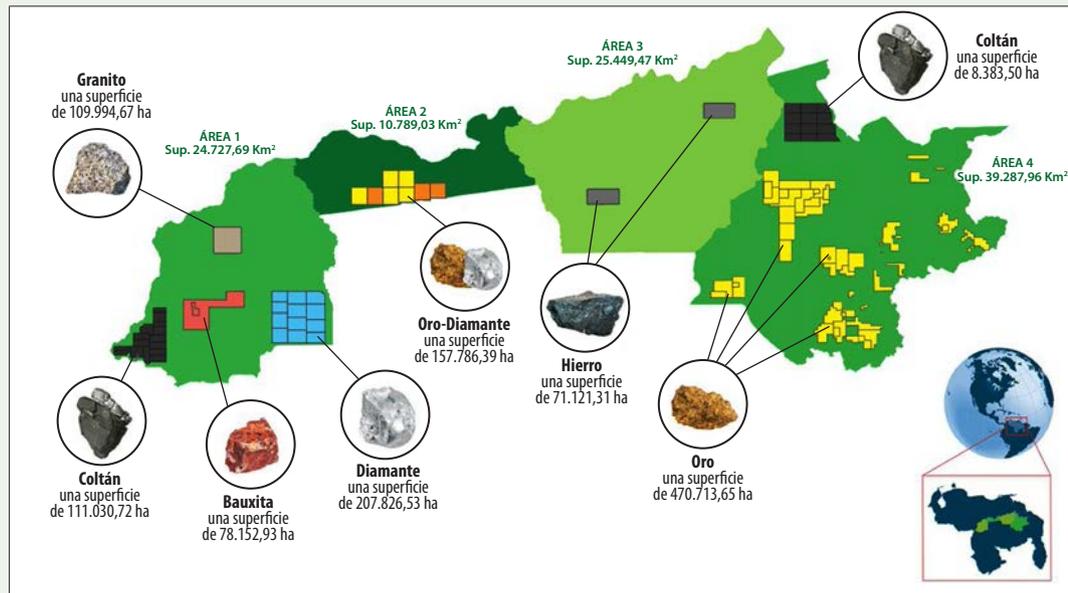
minería en la reserva forestal del Imataca⁴; se define una serie de políticas que incluyen la nacionalización del oro y el contrato con la empresa china Citic Group para realizar el mapeo geológico venezolano; en 2011 surge el Arco Minero del Orinoco (en su momento llamado Arco Minero de Guayana).

CREACIÓN OFICIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL ARCO MINERO DEL ORINOCO

El año 2016 se oficializa la creación del Arco Minero del Orinoco (AMO)⁵, con una extensión de casi 112 mil km², que representa el 12% del territorio venezolano. Este proyecto tiene cuatro áreas de explotación, como se muestra en la figura 1, algunas de ellas con vocación minera.

La creación oficial del AMO se da en el contexto de la *gran crisis* de Venezuela (2013-2020), sin precedentes en la historia contemporánea de América Latina. Esta crisis no es solo económica; involucra múltiples dimensiones: la territorial, la política, la institucional e inclusive la sociocultural y la migratoria, contribuyendo al colapso del Petro-Estado y de la centenaria Venezuela petrolera. El declive de la economía venezolana desde el año 2000 se da a partir de un proceso de neoliberalización progresiva, de flexibilización, de desregularización, de retroceso de la participación estatal y de favorecimiento a la inversión extranjera.

Figura 1
Áreas de explotación del Arco Minero del Orinoco



Nota: total superficie a explorar: 1,3 millones ha, período 2019-2025

Fuente: Ministerio del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico, Gobierno Bolivariano de Venezuela.

4 La Reserva Forestal Imataca (RFI) fue creada en 1963, con más de 3,5 millones de hectáreas de bosques al sur del Delta del Orinoco. Concentra una de las biodiversidades más ricas y variadas de Latinoamérica, con importantes reservas de recursos minerales, específicamente oro y diamantes, y un tesoro etnocultural de más de 29 mil habitantes entre diversas comunidades indígenas (pemón, kariña, warao, arawak, akawaio). Ha sido el epicentro de una pronunciada conflictividad socioambiental. Véase: <https://ejatlas.org/conflict/reserva-forestal-imataca-region-guayana-de-venezuela>

5 Se crea mediante Decreto N° 2248 como Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.

El proyecto del AMO surge como una zona de desarrollo estratégica nacional, que en realidad es una zona económica especial (ZEE). La figura de las ZEE proviene del modelo chino y significa una forma de regulación particular de un territorio en búsqueda de su rápido desarrollo económico. En Venezuela se crea esta figura en 2014, y se inicia ofreciendo la región a 150 empresas internacionales y a algunas nacionales, para que impulsen su desarrollo. Al mismo tiempo, esta situación se justifica presentándola como una forma de solución o formalización de la minería ilegal.

Sin embargo, durante todo el proceso una de las características es la casi total restricción a la información y a los acuerdos que firma el Estado. También es parte de la situación el que no se haya respetado normativas ambientales, no se haya publicado estudios de impacto ambiental y tampoco se haya respetado las consultas previas a los pueblos indígenas.

LAS PARTICULARIDADES DEL EXTRACTIVISMO AMAZÓNICO VENEZOLANO

Lo que sucede actualmente en la Amazonía venezolana con el proyecto del AMO permite explicar las dinámicas de expropiación y despojo que se están produciendo en la zona. Sin embargo, lo que sucede en todo el proceso venezolano expresa una crisis aun mayor, en la que prevalece una forma de extractivismo predatorio configurado por una política de saqueo.

La crisis hegemónica generada en Venezuela tiene que ver con la muerte del expresidente Hugo Chávez, con el colapso del Estado y la descomposición política del país, que han provocado una fragmentación tanto política como económica de la sociedad. Esto supone que, aunque existe un Estado, prevalecen complejas estructuras de poder que funcionan en red. En ese marco, la oposición política se ha hecho borrosa y queda desvirtuada.

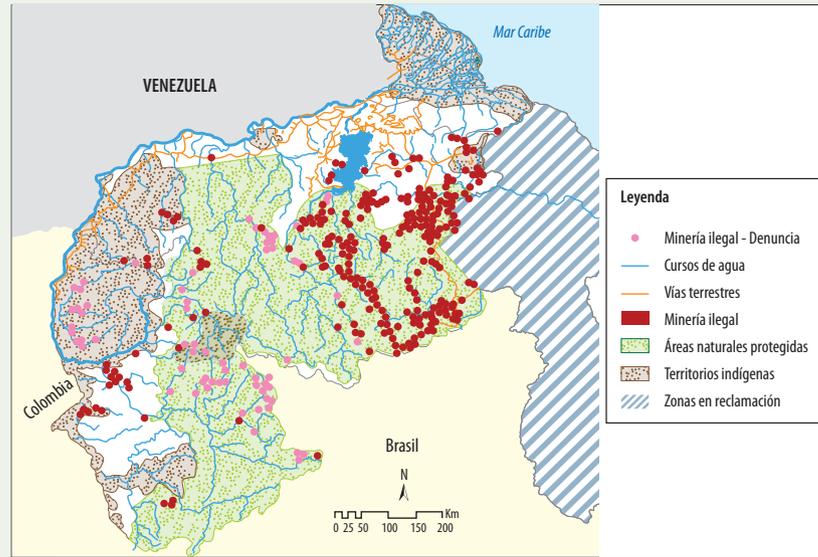
En esta dinámica, los emprendimientos formales que se quisieron llevar a cabo en el AMO fueron inviables por varias razones: la inseguridad jurídica, la imposibilidad de demostrar la factibilidad económica, la situación de conflicto territorial y las sanciones internacionales a Venezuela. Lo señalado no es sino el reflejo del colapso económico que ha pulverizado la economía formal y que ha desembocado en la situación actual, con una economía informalizada que se disputan varios sectores. Es el caso de la minería, en la que, como se observa en el mapa 2, prevalecen múltiples puntos de minería legal e ilegal, con mayor densidad en algunos lugares que en otros.

Los emprendimientos formales que se quisieron llevar a cabo en el AMO fueron inviables por varias razones: la inseguridad jurídica, la imposibilidad de demostrar la factibilidad económica, la situación de conflicto territorial y las sanciones internacionales.



Orainformacion.com

Mapa 2
Más allá del AMO formal: prevalencia del extractivismo predatorio

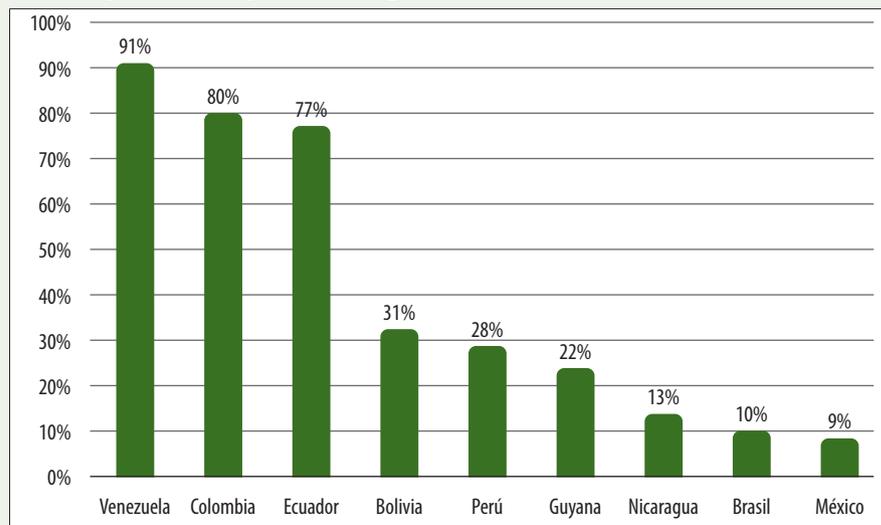


Fuente: Wataniba, Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía, Venezuela.

UN EXTRACTIVISMO FUNDAMENTALMENTE ILÍCITO

El contexto y el proceso señalado han fortalecido economías ilícitas, que se sostienen en un clima político en el que la explosión de la corrupción ha convertido las prácticas criminales en rutina común. Por ejemplo, en el gráfico 1 se observa el porcentaje estimado de oro no producido legalmente en diferentes países; Venezuela figura como el país con mayor porcentaje de ilegalidad (91%).

Gráfico 1
Porcentaje de oro no producido legalmente. Países de América Latina



Fuente: Verité, 2016⁶.

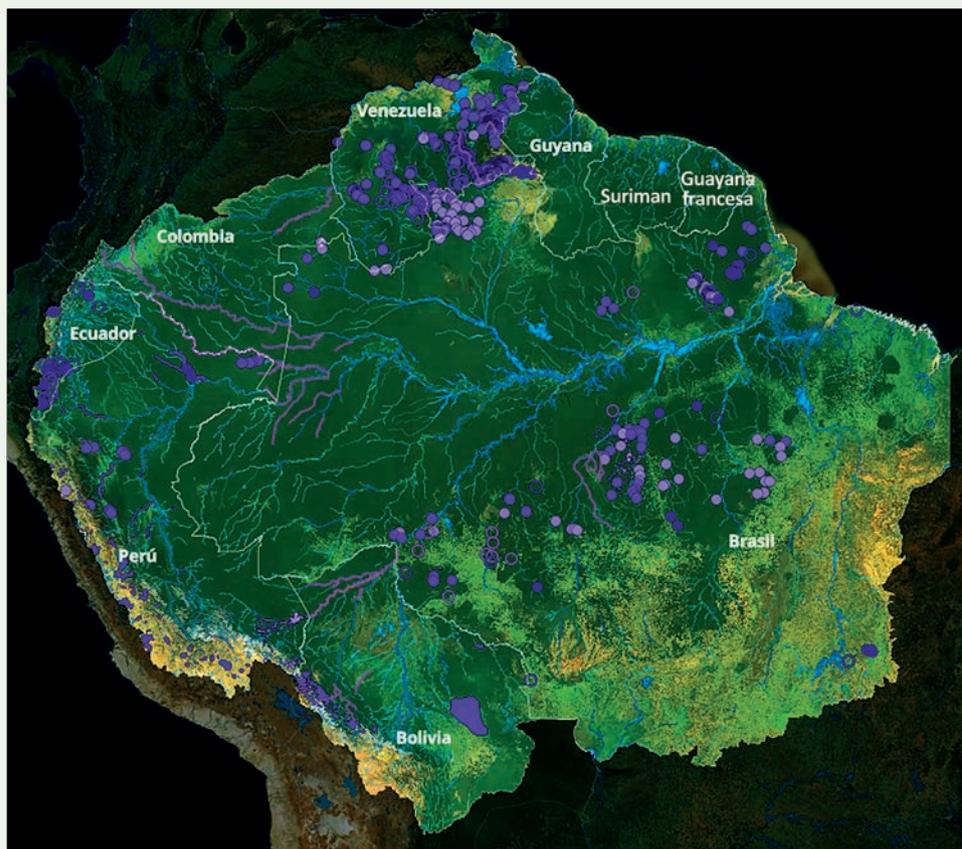
⁶ Verité (2016), "The Nexus of Illegal Gold Mining and Human Trafficking Report", 30 de julio.

En este sentido, el territorio amazónico está siendo penetrado por grupos armados y por prácticas criminales. También existen los grupos llamados *garimpeiros*, que son sectores que operan ilegalmente en la explotación de minerales en la región sur de la Amazonía venezolana. Por otra parte, el Acuerdo de Paz⁷ firmado en Colombia ha generado desplazamientos hacia el territorio venezolano.

AMAZONÍA EXPUESTA

Un término importante que expresa la situación presente es el de “explotabilidad”, es decir que si existen dos territorios con grandes reservas de oro, probablemente uno tenga más facilidad de acceso que el otro. Es así que la Amazonía venezolana es actualmente la región más explotable, como lo demuestra la cantidad de puntos de explotación minera que se muestran en el mapa 3. A esto se suman las sanciones de EE. UU., que han asfixiado la industria petrolera venezolana, dando más peso a la minería.

Mapa 3
Mapa del estudio “Amazonía Saqueada” (2018)



Fuente: <https://saqueada.Amazoniasocioambiental.org/story>

Frente a la imposibilidad de emprendimientos mineros formales, el presidente Maduro creó las denominadas “brigadas mineras socialistas”, que realizan convenios con grupos de mineros, dando como resultado final una zona sometida a la minería ilegal. Un ejemplo fundamental de esta situación es el de la zona de Las Claritas, mostrada en el mapa 4, donde se observa la devastación

⁷ Firmado el 26 de septiembre de 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP.

provocada por la minería ilegal. En los dos puntos georreferenciados del mapa, Las Cristinas y Brisas, se ubican los dos emprendimientos formales más importantes de Venezuela, que comparten territorio con la zona dominada por la minería criminal, con una evidente coexistencia conflictiva.

Mapa 4
Zona Las Claritas en el estado Bolívar



Fuente: Google Earth.

Es importante tener en cuenta en primer lugar que la expansión de la minería ilegal en Venezuela no se podría haber desarrollado sin algún nivel de complicidad con el Estado. En segundo lugar, hay una estrecha relación entre lo legal e ilegal. En consecuencia, de ambos aspectos se deduce que existen acuerdos políticos híbridos que operan con una serie de complejidades y que se configuran con poderes territoriales.

POLÍTICA PARA LA AMAZONÍA EN LA PANDEMIA DE COVID-19

Durante la pandemia continúa la compleja hermenéutica del saqueo, que no solo se observa en el funcionamiento de la minería, sino en toda la dinámica de esta política extractivista. En abril de 2020 se oficializó la Resolución 0010, que permite la minería en los ríos. Esta medida, que puede definirse como trágica, extiende todavía más la influencia minera en los territorios. A esto se suma que en la pandemia se evidencia mayor impunidad, se mantienen las disputas territoriales y hay protestas y alta conflictividad en el AMO.

Lo expuesto nos muestra que es evidente que el petróleo ha pasado a segundo plano y el oro ha llegado a ser el *commodity* central de la política y del conflicto venezolano.

Ciclos de expansión territorial de la agricultura capitalista en las tierras bajas de Bolivia⁸

El desarrollo de la agropecuaria capitalista y la agroindustria en sus tres ciclos obedece, fundamentalmente, al importante rol que jugó el Estado en cada uno de ellos [...]. Se puede afirmar que desde 1952 a esta parte, absolutamente todos los Gobiernos apoyaron “la marcha hacia el oriente”.
Enrique Ormachea Saavedra⁹

Cuando el Gobierno de Evo Morales planteó el objetivo de incrementar la producción agropecuaria destinada a la exportación, desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) sostuvimos que se trataba de un diseño orientado a promover un tercer ciclo de apoyo estatal a la expansión de la agroindustria en las tierras bajas de Bolivia.

En consecuencia, no era una propuesta coyuntural, sino de continuidad de una política estatal que, con diferentes matices, tuvo dos ciclos previos. El tercer ciclo, que lo inicia el Gobierno de Evo Morales y que lo continúan Jeanine Añez y Luis Arce Catacora, se caracteriza, entre otros aspectos, por su énfasis en el incremento de la producción agropecuaria a través de una expansión desmesurada de la frontera agrícola. Este planteamiento, en un escenario de existencia de muy pocas tierras fiscales todavía disponibles para ser distribuidas, está afectando a los pueblos indígenas de las tierras bajas.

En este sentido, es importante dar a conocer los rasgos centrales de cada uno de los ciclos de apoyo estatal al desarrollo de la agroindustria en las tierras bajas del país, a objeto de conocer sus implicaciones territoriales. El haber optado, desde la década de 1950 a la fecha, por un modelo que privilegia la expansión de la frontera agrícola como medio para el incremento de la producción agrícola, en vez de incrementar la productividad agrícola para este mismo fin, ha dado rienda suelta a una expansión territorial acelerada que cada vez abarca más zonas. Este proceso va afectando territorios indígenas, reservas forestales y áreas protegidas.

8 Este documento resume los elementos centrales de la exposición “Políticas públicas y ampliación de la agroindustria hacia la Amazonía boliviana”, presentada por el investigador del CEDLA Enrique Ormachea Saavedra en el evento virtual “Amazonía: situación actual y perspectivas”, realizado el 19 de agosto de 2020. Véase: <https://cedla.org/eventos/amazonia-situacion-actual-y-perspectivas/>

9 Enrique Ormachea Saavedra (2021), “Políticas públicas y expansión de la agroindustria hacia la Amazonía boliviana”, *Plustrabajo*, núm. 4: 53-96.



CICLOS DE EXPANSIÓN

El primer ciclo de expansión de la agricultura capitalista en el país se dio en el periodo “nacionalista” (1953-1984). Se concentró geográficamente en la denominada “Área Integrada” del departamento de Santa Cruz, conformada por las provincias Andrés Ibáñez, Warnes, Obispo Santiesteban, Sarah e Ichilo, y se basó en el desarrollo de cultivos como arroz, caña de azúcar, maíz y algodón. Estos rubros formaban parte de una estrategia de sustitución de alimentos manufacturados y de materia prima para la industria textil, así como de diversificación de exportaciones.

El segundo ciclo, que corresponde al periodo “neoliberal” (1985-2005), tuvo lugar a partir de políticas que privilegiaron el cultivo de la soya. Si bien esta oleaginosa se destina en parte al mercado interno, como insumo para la industria aceitera y la producción cárnica (bovina, porcina y de aves), es principalmente un insumo para la exportación de productos derivados de este cultivo. Y aunque inicialmente el cultivo de la soya comenzó a desarrollarse en el Área Integrada antes mencionada, se expandió hacia zonas planas, aptas para el desarrollo de una agricultura mecanizada a gran escala, es decir, hacia el este del departamento de

Santa Cruz, de manera específica en aquellas del tramo Pailón-Los Troncos, al este del río Grande, y en el área situada al norte de San José de Chiquitos.

El tercer ciclo, promovido por el Gobierno del MAS (2006 a la fecha), si bien sigue apoyando la producción agrícola de granos a gran escala, con la soya como cultivo principal, también promueve con ese insumo la producción de biodiesel, así como la producción de etanol a partir del cultivo de caña. Asimismo, está empeñado en incentivar una ganadería bovina orientada a la producción de carne para la exportación. En términos territoriales, este tercer ciclo es mucho más expansivo pues, además de ampliarse la producción hacia la provincia Guarayos, lo hace también hacia varias zonas de la Chiquitanía, incorporando partes importantes de las provincias Velasco, Ñuflo de Chávez, Ángel Sandoval y Germán Busch.

Entre 2004 y 2019, el departamento de Santa Cruz incorporó a su superficie cultivada 1,2 millones de hectáreas adicionales a las que cultivaba, lo que significa un promedio de aproximadamente 85 mil hectáreas por año; esto demuestra el importante avance de su frontera agrícola. Pero, además, durante este tercer ciclo, Santa Cruz se ha consolidado como el departamento con el mayor hato ganadero bovino en el país —pues a 2019 concentraba 4,2 millones de cabezas (43,6% del total), sobrepasando a Beni, que reunía 2,9 millones (30,7%)—, así como por su rol de principal oferente de carne faenada a partir de la presencia de frigoríficos con capacidad de exportación de carne vacuna.

Sin embargo, la propuesta gubernamental de ampliación de la frontera agropecuaria en este tercer ciclo no se limita al departamento de Santa Cruz. Se expande también hacia otros territorios de las tierras bajas que forman parte de la Amazonía boliviana: el norte del departamento de La Paz y los departamentos de Pando y Beni.

LAS NUEVAS REGIONES PARA IMPLANTAR LA AGROINDUSTRIA

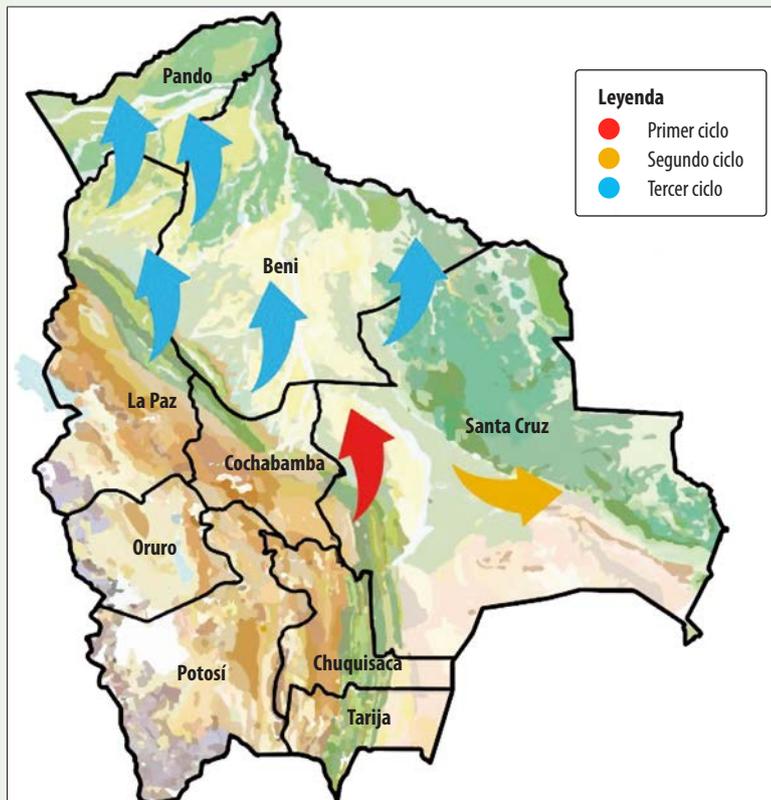
Como se sabe, a pesar de todas las advertencias técnicas que señalaban la inviabilidad técnica y financiera para la producción de caña de azúcar a gran escala y su industrialización en el norte del departamento de La Paz, el Gobierno del MAS puso en marcha el Ingenio Azucarero San Buenaventura con la perspectiva de lograr, a partir del mismo, una ampliación de la frontera agrícola en la provincia Abel Iturralde.

Asimismo, en contra de la vocación forestal maderable y no maderable de Pando, e ignorando las funciones ambientales y ecológicas que cumple el gran bosque de la Amazonía norte del país, el Gobierno del MAS busca convertir a ese departamento en productor agrícola. En esa línea, está incentivando la producción mecanizada de granos a gran escala, tanto en la provincia Nicolás Suárez como en la provincia Madre de Dios.

En el caso de Beni, la producción mecanizada a gran escala de arroz y soya viene expandiéndose en las provincias Marbán y Cercado, y se ha aprobado un nuevo Plan de Uso del Suelo que habilita alrededor de 11 millones de hectáreas para la producción agrícola y el cultivo de pastos para la ganadería.

Este breve recuento permite advertir cómo la producción agrícola asociada a la agroindustria capitalista va expandiéndose territorialmente y avasallando los territorios de pueblos indígenas, las áreas protegidas y las reservas forestales del país.

Mapa 1
Ciclos de expansión de la agroindustria



Fuente: elaboración propia.

ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LAS PERSPECTIVAS DEL SECTOR EN EL PAÍS

- Las políticas de reactivación económica, a raíz de la crisis agudizada por la pandemia, están dirigidas a fortalecer la agroindustria, sobre todo a través de mecanismos de financiamiento bancario que dan lugar a que quienes acceden al financiamiento sean campesinos ricos o grandes empresarios, quedando al margen los campesinos pobres.
- El escenario de profundización de la crisis económica ha llevado al actual Gobierno, también del MAS, a plantear políticas agrarias orientadas a la exportación y expansión de la frontera agrícola.
- Actualmente tenemos un poder agroindustrial fortalecido.
- Existe un movimiento sindical campesino subordinado al MAS y dirigido por campesinos ricos —es decir, campesinos que en los hechos ya han dejado de ser tales—, que producen con fuerza de trabajo asalariada y que encabezan la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), exigiendo biocombustibles y transgénicos.
- El movimiento indígena ha sido profundamente dividido y está debilitado.

La agenda agroempresarial convertida en principal política pública agraria del Gobierno del MAS

El incremento de la producción agropecuaria en las tierras bajas, fundamentalmente en Santa Cruz, y el consiguiente estancamiento en la zona de valles y del Altiplano, se debe a los siguientes hechos:

- Constitucionalización de la gran propiedad agraria. La Constitución Política del Estado aprobada en 2009 señala que el límite máximo establecido de 5.000 hectáreas de propiedad solo tendrá efecto a partir de su aprobación. La no retroactividad de la ley ha permitido que en Bolivia persista la gran propiedad agraria que se fue consolidando desde 1953.
- Se legalizaron desbosques ilegales realizados desde 1996. Esta política orientada a favorecer al sector agroindustrial que ha venido desboscando de manera ilegal para ampliar la frontera agrícola.
- Se ampliaron los plazos para verificar la función económica social (FES) de la tierra, a pesar de que, por ley, la FES debe ser comprobada cada dos años. Sin embargo, el sector de la agroindustria consiguió que esta verificación se amplíe a cada cinco años.
- Se generó una serie de normas a favor de desbosques y quemas para la ampliación de la frontera agrícola. Los resultados se evidencian en los incendios en la Chiquitania.
- Se legalizó la producción de biocombustibles.
- Se legalizó un nuevo evento transgénico para la soya.

Amazonía, pandemia y reactivación económica en el Perú¹⁰

Cada día comunidades campesinas y nativas ven cómo sus territorios son devastados, consumidos por la avaricia y el desprecio por la ley. Su lucha no se detiene, pues saben que la conquista no ha terminado.

Ernesto Ráez Luna¹¹

CONTEXTO: EL DESARROLLO EN LA AMAZONÍA PERUANA

La situación actual en la Amazonía peruana es el resultado de un proceso histórico que se ha visto agravado en los últimos años. Para entenderlo, es necesario destacar diez datos importantes que describen ese proceso:

- Desde la Colonia, antes de la formación de la República, existió actividad minera en la cuenca amazónica, concentrada en la región de la vertiente oriental de los Andes. Como resultado de esta explotación, más de la mitad de los pasivos ambientales¹² mineros peruanos, que son más de ocho mil, se concentran en seis ríos de la cuenca amazónica.
- En la selva norte de la Amazonía peruana la explotación y transporte de petróleo ha significado la contaminación de cuencas. El oleoducto más largo del Perú, conocido como Oleoducto NorPeruano (ONP) —que desde la zona de explotación de petróleo, en el departamento de Loreto, al noreste del país, atraviesa cinco departamentos y llega hasta Piura—, sufre derrames recurrentes de crudo que en varios casos se han extendido de manera descontrolada. En la misma región, en la zona de los ríos Corrientes, Tigre y Pastaza, ubicados en la margen izquierda del río Marañón en el sector noroccidental del

¹⁰ Este documento es una síntesis de la exposición “Amazonía, pandemia y reactivación económica en el Perú”, presentada por el docente de la Escuela de Economía y Gestión Ambiental de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima, Ernesto Ráez Luna, en el evento virtual “Amazonía: situación actual y perspectivas” realizado el 19 de agosto de 2020. Véase: <https://cedla.org/eventos/amazonia-situacion-actual-y-perspectivas/>

¹¹ De la columna del autor en: <https://rpp.pe/columnistas/ernestoraezluna/resistencia-indigena-en-defensa-de-la-Amazonia-noticia-1199751>

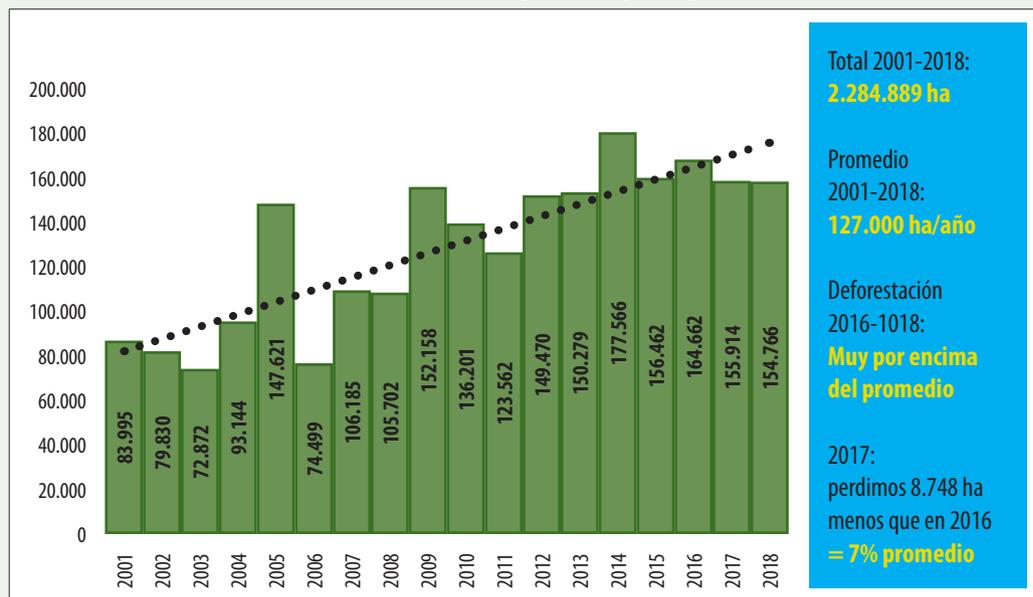
¹² Los pasivos ambientales son instalaciones, efluentes, emisiones, sitios contaminados y restos o depósitos de residuos que afectan de manera real, potencial o permanente la salud de las personas y a la calidad del ambiente, así como los componentes que hacen posible su funcionalidad. Véase: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) (2020), “5 puntos clave para entender la nueva regulación sobre pasivos ambientales”, *Actualidad ambiental*, 14 de febrero. <https://www.actualidadambiental.pe/spda-5-puntos-clave-para-entender-la-nueva-regulacion-sobre-pasivos-ambientales/>

departamento de Loreto, las cuencas han sido constantemente contaminadas por efluentes y derrames petroleros a lo largo de medio siglo.

- La minería ilegal llegó a la Amazonía con mucha mayor fuerza a inicios del siglo XXI. Actualmente, con la dinámica generada por la pandemia y con la represión que se dio en 2019 contra la minería ilegal, en el marco de un plan con este objetivo en el departamento de Madre de Dios, al sur de esta región selvática, dicha actividad se expande de norte a sur. Adicionalmente, la actual subida exponencial del precio del oro conduce a lo que se podría llamar una “metástasis” de minería aurífera, con enclaves de minería ilegal en toda la Amazonía.
- La explotación de madera ilegal es incontrolable en la selva peruana. La situación ha alcanzado tal magnitud, que investigadores consideran que, en determinadas cuencas, entre el 80% y el 90% de la madera que sale es ilegal. El Estado ha mostrado una absoluta incapacidad para controlar la tala ilegal, por la constante crisis política a la que ha sido sometido el sector forestal peruano.
- El tráfico de tierra ha crecido en la última década, en especial en territorios indígenas y de población ribereña (nativos amazónicos producto del mestizaje). En ese escenario, el Estado genera constantemente nuevos mecanismos que constituyen trabas para respetar los derechos territoriales, para no titular territorios indígenas y para no reconocer o demorar en reconocer a las comunidades nativas.
- La protección a pueblos indígenas en aislamiento y/o contacto inicial es muy precaria, a pesar de que el Estado peruano estableció áreas de protección denominadas reservas territoriales o reservas indígenas. Sin embargo, la ley permite que dentro de estas áreas se otorguen concesiones para la actividad extractiva, lo cual va en contra de toda idea de protección. A lo mencionado, se suma un proceso educativo de muchos años que elimina las culturas indígenas; en este han participado la Iglesia católica y otros grupos religiosos. A pesar de ese complejo contexto, se ha logrado poner en marcha algunas iniciativas, como la que el Congreso debatía en agosto de 2020 sobre la posibilidad de incorporar una salvaguarda para que las reservas territoriales realmente cumplan su función.
- En la Amazonía peruana avanza la colonización ecocida, que se expresa en deforestación, incendios recurrentes y el nacimiento/crecimiento de ciudades social y ambientalmente tóxicas.
- El Estado peruano insiste en realizar inversiones para la construcción de vías de penetración, cuyo fin es promover un mayor desarrollo de actividades extractivas. Esta lógica parte de la visión que plantean los Gobiernos y otros actores de la sociedad, que considera al extractivismo como la única forma de desarrollo de la Amazonía.
- Como en muchos países de la región, son constantes los asesinatos y los ataques contra líderes comunales que tratan de defender sus territorios. Incluso las protestas de pueblos indígenas y comunidades son reprimidas por el Estado, con muertos y heridos.
- El narcotráfico se ha vuelto algo cotidiano, al punto de que el Estado ha determinado como zona de emergencia la región del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Se estima que en el VRAEM, ubicado en el centro de Perú, se cultiva más de la mitad de la coca que se produce en Perú. Se caracteriza por ser una de las regiones más pobres, con mayor violencia y con débil presencia del Estado. La represión que tiene lugar en esta zona, con mayor fuerza desde el año 2019, ha conducido a que grupos de cocaleros se movilen constantemente a otras zonas de la Amazonía.

Las consecuencias de esta situación tienen muchas formas. Una de ellas es el incremento de la deforestación, que en Perú alcanzó un promedio de más de 127.000 hectáreas por año entre 2001 y 2018. Aunque en los últimos años hubo una pequeña reducción, esto no cambia la tendencia, que muestra el gráfico 1.

Gráfico 1
Tendencia de la deforestación en la Amazonía peruana (en ha)



Fuente: tomado de la presentación de Ráez Luna, "Amazonía, pandemia y reactivación económica en el Perú", en el evento virtual "Amazonía: situación actual y perspectivas" realizado el 19 de agosto de 2020.

El común denominador de este panorama es que el Estado ha tenido una participación activa como principal impulsor de narrativas, políticas e inversiones que resultan perjudiciales tanto para el bioma como para los pueblos amazónicos, y que terminan protegiendo a los agentes criminales. La impunidad en la Amazonía peruana tiene niveles altísimos, con una tendencia a continuar con el "proyecto colonial", que se ha ido agudizando a lo largo del tiempo.

La conjunción de todas estas circunstancias desemboca en la existencia de un territorio violentamente disputado, en el que están presentes diferentes actores con diversos intereses.

LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN LA AMAZONÍA PERUANA

En el contexto de la pandemia del covid-19, el Perú fue el primer país del continente que respondió declarando la cuarentena el 16 de marzo de 2020. Además, el Gobierno optó por un paquete que sumó más de 26.000 millones de dólares para la atención sanitaria y la entrega de bonos, en una denominada "segunda ola de bonos," destinada a personas en situación de pobreza, a fortalecer las capacidades de los Gobiernos locales y regionales, a ofrecer seguridad alimentaria y a la reactivación económica, evitando así quiebras masivas de pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, los problemas en la Amazonía siguieron su curso. Al día siguiente de la declaración presidencial de cuarentena, ya se tenía un primer caso de covid-19 en esta región. Inmediatamente, la principal organización indígena amazónica del país, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSESP),

tuvo que empezar a asumir la carga del alto riesgo que enfrentaban los pueblos indígenas por la pandemia. En el transcurso de la crisis, en respuesta a pedidos de investigadores, de la prensa independiente y de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) a nivel regional, que venían desde inicios de marzo, la defensoría publicó no menos de 30 informes de exhortaciones al Estado peruano para que focalizara sus esfuerzos en los pueblos indígenas.

En la Amazonía peruana la incidencia de la pandemia es un 63% mayor que en el promedio nacional, tomando en cuenta la información a los primeros días de agosto de 2020, como muestra la figura 1. Las muertes se fueron acumulando a pasos agigantados, pasando de 14 en abril de 2020 a 2.400 a fines de julio de ese año. Además, casi diariamente se sufrió la pérdida de líderes históricos y ancianos indígenas de pueblos amazónicos. El Estado reaccionó recién el 22 de mayo de 2020, con el Decreto Legislativo N° 1489, para enfrentar la pandemia en comunidades indígenas y poblados amazónicos.

Figura 1
Incidencia de la pandemia en el Perú y en la Amazonía peruana



Fuente: <https://www.caaap.org.pe/2020/04/17/casos-confirmados-de-covid-19-en-la-Amazonia/> (8 de agosto de 2020).

En este sentido, el Estado demostró su incapacidad para combatir la situación; tampoco brindó información clara sobre el panorama. Es más, tres días después de emitido el decreto, no pudo reportar la identidad étnica de los afectados por la pandemia. De esta manera, son los pueblos indígenas, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones aliadas las que monitorean lo que sucede en los territorios.

LA RESPUESTA INDÍGENA

Es importante mencionar que solo el 2% de los peruanos son indígenas amazónicos, pero en el país existen 53 pueblos indígenas. Esto pone en evidencia la riqueza cultural de los pueblos indígenas del Perú y la posible vulnerabilidad en que se encuentran muchos de ellos.

Esta situación también puso en evidencia que muchas comunidades han perdido su capacidad productiva, pues sus territorios han sufrido procesos de erosión y contaminación. Por ello, para su seguridad alimentaria ahora dependen del mercado, así como del flujo externo de otros bienes.

Un elemento normalmente invisibilizado es la presencia de una importante población de indígenas amazónicos que viven en las ciudades, en general en condiciones de pobreza extrema, con cuadros severos de morbilidad y malnutrición y con enfermedades como diabetes.

En este sentido, a raíz de los problemas surgidos de la pandemia, las comunidades tomaron una serie de medidas como respuesta al escaso accionar del Estado. Estas medidas incluyeron cerrar el ingreso de extraños a las comunidades, que familias se hayan internado en el monte, y que grupos como el Comando Matico Covid 19¹³ trataran de brindar atención mediante medicina tradicional. Asimismo, se declararon cordones sanitarios territoriales y participaron en los comandos multisectoriales del Estado.

En el caso de los pueblos indígenas en aislamiento o en contacto inicial, debido a su vulnerabilidad epidemiológica, la situación de riesgo prevalece: son vulnerables a sufrir brotes incluso cuando acabe la pandemia en el resto del ámbito nacional, sobre todo porque el Estado no ha definido ninguna estrategia al respecto.

¿CUÁL REACTIVACIÓN?

Las actividades ilegales en la Amazonía no se han detenido en ningún momento, ni durante la pandemia de covid-19, cuando los grandes proyectos mineros y el oleoducto siguieron operando. Los líderes indígenas denunciaron que la tala ilegal y el narcotráfico continuaron. Como ejemplo, en una noticia del 8 de agosto de 2020 se demostró la existencia de un nuevo foco de minería ilegal en Madre de Dios¹⁴, que amenaza a indígenas del Pariamanu¹⁵.

El Ministerio del Ambiente del Perú informó que a finales de junio de 2020 la deforestación se había reducido, dato que no guarda relación con las cifras que se reportan permanentemente. Respecto a ese periodo, en el que se sabe que las quemadas bajan, en agosto de 2020 el servicio forestal identificó que los incendios aumentaron en 121% respecto a 2019.

13 El “Comando Matico”, conformado por jóvenes indígenas shipibos de Pucallpa y Yarinacocha, es un grupo que utiliza preparados naturales para atender a indígenas contagiados por covid-19 que no cuentan con los recursos ni con la atención médica respectiva. Véase: <https://www.actualidadambiental.pe/comando-matico-y-su-aporte-para-atender-a-indigenas-contagiados-por-covid-19/>

14 Madre de Dios es un departamento amazónico del Perú.

15 Enrique Vera (2020), “Madre de Dios: nuevo foco de minería ilegal amenaza a indígenas del Pariamanu”, Mongabay, 8 de agosto. <https://es.mongabay.com/2020/08/madre-de-dios-mineria-ilegal-boca-pariamanu-indigenas-peru/>

Los grupos de poder económico han estado presionando para que se fortalezca la política extractiva minera y petrolera. Los principales gremios corporativos firmaron un comunicado público el 15 de julio de 2020, exigiendo no ratificar el Acuerdo de Escazú¹⁶. El Gobierno del expresidente Sagasti, respondiendo a la presión corporativa, formó un nuevo gabinete ministerial con Pedro Cateriano a la cabeza, quien propuso abiertamente impulsar la minería. Por primera vez en el Perú, el Congreso le retiró la confianza.

LO QUE EVIDENCIÓ LA PANDEMIA

Después de tres décadas de crecimiento ininterrumpido, la pandemia desnudó las profundas desigualdades, la inmensa ignorancia, el dominio de la ilegalidad y el abuso, así como la persistente incapacidad del Estado.

Aunque a nivel nacional se realizaron ciertos esfuerzos para evitar un escenario trágico, las perversiones estructurales, resultado de la pobreza monetaria, las limitaciones productivas y la vulnerabilidad por malnutrición, propiciaron un escenario trágico.

La situación produjo mayores desafíos para los pueblos indígenas, debido a las respuestas del Gobierno encabezado por Sagasti en 2020, que cedió a los grupos de poder y diseñó una reactivación en la que se continuaba con el modelo económico extractivista y primario exportador. La pandemia sigue avanzando, por lo que la reactivación podría causar mucho más mal que bien en la Amazonía.

REFLEXIONES Y PREGUNTAS

¿Modelo o sistema? En realidad, estamos frente a un sistema muy estructurado y antiguo, del que son parte la educación opresora, el crimen ambiental y la corrupción.

La colonialidad del poder en el Perú continúa actuando. Para la derecha no existe la dimensión ecológica, y para la izquierda es marginal e incómoda. Ante esta situación nos preguntamos:

¿Cuánta capacidad de solidaridad y de inventiva tienen los sectores populares en la Amazonía?

En la actual situación de crisis generalizada, ¿hasta qué punto podemos ayudar a que se generen cambios, no solo en la pandemia, sino en relación a las próximas emergencias ecológicas?

¹⁶ Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

La razón detrás de la locura: bolsonarismo en la pandemia¹⁷

Es necesario ejercitar la imaginación teórica y práctica más allá de las fronteras de la crisis, para que podamos ver el fin del capitalismo nuevamente, antes del fin del mundo.

Fabio Luis Barbosa dos Santos¹⁸

Los efectos inmediatos de la forma de actuar del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro y el mecanismo político que conlleva, requieren de un análisis, sobre todo teniendo en cuenta su efecto inmediato en todo el país.

Bolsonaro no aprovechó la pandemia para concentrar poder; su intención era radicalizar un horizonte de refundación moral y política, una revolución a la manera del fascismo. Ha mostrado conductas controvertidas, cosechó enemigos y logró victorias y derrotas. Seis meses después del inicio de la pandemia, Bolsonaro mostró un perfil ideológico más discreto, realizando acuerdos con los pequeños partidos de centro y de derecha y extendiendo los programas de renta mínima. Actualmente parece haber encontrado la que llamamos una moralidad de “lulismo invertido”, que puede otorgarle una estabilidad sin precedentes, construida sobre una montaña de 100 mil muertos.

En este sentido, nos preguntamos: ¿cómo es que el presidente de Brasil pasa de un intento de “revolución invertida” a un “lulismo invertido”?

CONTEXTO EN EL QUE BOLSONARO LLEGA AL PODER Y SU FORMA DE MANEJO

Después de una década de presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), quien articuló modestas mejoras para “los de abajo” manteniendo los privilegios para “los de arriba”, el lulismo se agotó.

17 Este documento es una síntesis de la exposición “La razón detrás de la locura: bolsonarismo en la pandemia”, presentada por Fabio Luis Barbosa dos Santos, profesor de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), en el evento virtual “Amazonía: situación actual y perspectivas”, realizado el 19 de agosto de 2020. Véase: <https://cedla.org/eventos/amazonia-situacion-actual-y-perspectivas/>

18 En Fabio Luis Barbosa dos Santos (2020), “Bolsonarismo na pandemia explicado aos jovens”, Correio da Cidadania, 16 de junio de 2020. <https://www.correiodacidade.com.br/34-artigos/manchete/14247-bolsonarismo-na-pandemia-explicado-aos-jovens>

Bolsonaro radicalizó la negación a la pandemia, haciéndose de enemigos en el proceso. En las primeras semanas de la pandemia, cada pronunciamiento del presidente provocaba nuevos cacerolazos. El presidente estaba perdido en su mundo paralelo.

La conjunción de junio de 2013¹⁹, los escándalos de corrupción y la recesión económica cambiaron el enfoque de las bases dominantes. Esto dio paso a la intensificación de la expoliación social y abrió las puertas a una lucha de clases. Este es el trasfondo del proceso con el que logran deponer a Dilma Rousseff en 2016, detienen a Lula y promueven la victoria de Bolsonaro en 2018.

Bolsonaro ofrece a las clases dominantes el marco de un nuevo neoliberalismo, en el cual se intensifica la violencia social, económica y política: es el Estado policial. Bolsonaro, sin tener un programa propio, subcontrata para la gestión de la economía a un “Chicago boy”, Paulo Guedes, quien es designado a la cabeza del poderoso Ministerio de Economía desde el inicio de su Gobierno. Como relleno, propone una agenda comportamental, cultural y científica retrógrada, una agenda que la élite tolera, aunque no sea plenamente de su agrado. El apoyo de las élites al Gobierno de Bolsonaro es de conveniencia; su

ideal sería un bolsonarismo sin Bolsonaro.

El presidente de Brasil tiene proyectos propios, cercanos a un concepto de dinastía con militares como el partido y con los evangélicos como base social. En este sentido, su mayor desafío es convertir el apoyo virtual que lo eligió en un apoyo real, y transformar a sus seguidores virtuales en camisas negras.

Las respuestas que da Bolsonaro a los problemas complejos son simples; es casi como en un videojuego donde un héroe se enfrenta a sucesivos villanos. En esta lógica, los logros del Gobierno importan poco porque las reglas de su eficacia política son inflamar a sus partidarios y naturalizar lo que antes era intolerable. Este es un movimiento que no puede retroceder y que, por el contrario, acumula cada vez más violencia, que crece como una bola de nieve.

A este ritmo, el presidente llamó a sus bases para exigir el cierre del Congreso en marzo de 2020. En respuesta, tres días después, una manifestación en defensa de la educación se convirtió en una contramanifestación por la democracia.

CONTEXTO EN LA PANDEMIA DEL COVID-19

La pandemia del covid-19 tuvo lugar en Brasil en el contexto relatado anteriormente. La manifestación del 15 de marzo de 2020, convocada por simpatizantes del mandatario para expresar el apoyo a su gestión y el descontento con el Congreso, fue cancelada por las restricciones sanitarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero esto no detuvo a la gente, que participó de todas maneras; también Bolsonaro estuvo presente. Tres días más tarde, la contramanifestación prevista se convirtió en un cacerolazo de alcance nacional, que permitió constatar que disminuía el apoyo de sectores ricos y clase media a Bolsonaro. Hay que tener en cuenta que los ricos y la clase media fueron los primeros en ser golpeados por el virus, pues son quienes más viajan al exterior.

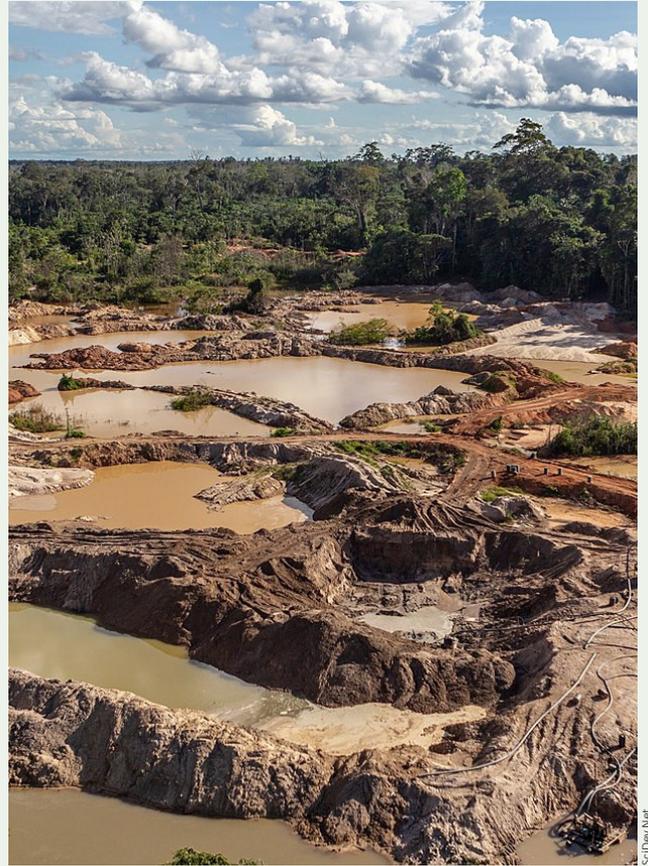
¹⁹ En junio de 2013 las ciudades de Brasil vivieron una serie de manifestaciones por el aumento del costo del transporte público y por el elevado gasto público para la realización de la Copa FIFA Confederaciones 2013, la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Demandaban, asimismo, mayor inversión en salud y educación.

Sin embargo, Bolsonaro radicalizó la negación a la pandemia, haciéndose de enemigos en el proceso. En las primeras semanas de la pandemia, cada pronunciamiento del presidente provocaba nuevos cacerolazos. El presidente estaba perdido en su mundo paralelo.

¿CUÁL ES EL CÁLCULO POLÍTICO DE BOLSONARO?

Bolsonaro percibe la crisis en dos dimensiones: sanitaria y económica. Bajo esta lógica, el presidente apuesta por que los efectos económicos se sentirán más que cualquier otro efecto.

De esta manera, su discurso contra el aislamiento social dialoga con la gente que muere de hambre, no de covid-19. Bolsonaro asume correctamente que los trabajadores quieren trabajar. La otra cara de esa política es que el Estado brasileño nunca ayudará a los trabajadores, como sucede en Europa. El fundamentalismo neoliberal de la economía es el punto de apoyo del cálculo político de Bolsonaro; es así como, en el contexto de la pandemia, se aplicaron medidas para flexibilizar las relaciones de trabajo.



Un segundo aspecto es la desacreditación generalizada de la política y de las instituciones, incluida la Red O'Globo, el principal monopolio de comunicaciones en Brasil. Incluso se puede señalar que este es el trasfondo de la autenticidad de Bolsonaro. En lugar de las falsas promesas de los políticos de siempre, que prometen contener las crisis, Bolsonaro reconoce la crisis estructural, admite la dinámica del neoliberalismo y no promete aplacar esta dinámica. Nunca pretendió contener la pandemia; su discurso se concentró en defender la libertad de las personas para trabajar y para luchar por su supervivencia. Esta arriesgada propuesta fue la que condujo a Brasil a una catástrofe.

¿CUÁL ES EL SENTIDO DEL GOBIERNO DE BOLSONARO? ¿POR QUÉ TIENE APOYO?

El significado más intrínseco del bolsonarismo es profundizar la violencia del mundo del capital, naturalizar la barbarie. Su lucha es casi una batalla cultural a nivel de los valores. El bolsonarismo pretende modificar las condiciones en las que las personas consideran legítimo manifestarse y revelarse.

En este sentido, Bolsonaro es un pionero del siglo XXI que abre camino a una nueva forma de actuar. Avanza anulando la delgada expresión de colectividad, de sociabilidad y sociedad civil, para profundizar la dinámica de continua regeneración de los negocios. Algo totalmente relevante de su Gobierno es que cuenta con el respaldo de las élites; el camino que el Gobierno transita armoniza con la agenda económica. Bolsonaro tiene abierto el camino para quemar bosques porque lo hace en la dirección que a las élites les conviene.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA PRINCIPAL ENTRE EL GOBIERNO DE BOLSONARO Y LOS GOBIERNOS DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES (PT)?

Los críticos a los Gobiernos progresistas solemos afirmar que, al negarse a enfrentar las raíces estructurales de la desigualdad y la dependencia, estos se han resignado a hacer una gestión de la crisis.

El Gobierno de Bolsonaro, por el contrario, no se propone hacer ninguna gestión porque gobierna por medio de la crisis. Esto se hizo evidente en una reunión ministerial grabada en abril de 2020 y que se dio a conocer al público por orden judicial. El propósito de esta reunión era definir un programa para estimular la economía en el contexto de la pandemia. Sin embargo, el programa económico fue muy poco discutido y la pandemia por covid-19 casi ni se mencionó, en un momento en el que Brasil avanzaba rápidamente a convertirse en epicentro mundial de la pandemia.

La grabación permitió escuchar que la pandemia fue mencionada, pero no como una crisis sanitaria, sino como una oportunidad para dismantelar la protección a la Amazonía. En palabras del exministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles²⁰, “mientras estamos en este momento de tranquilidad en cuanto a la cobertura de la prensa, que está ocupada en el covid, es momento de 'pasar el ganado'” (es decir, de cambiar todas las reglas y de unir esfuerzos para simplificar las normas). Este discurso evidencia la respuesta económica de Brasil en la pandemia, que es básicamente facilitar la deforestación, los despidos y las reestructuraciones.

Más allá del cinismo y la indiferencia respecto a la pandemia, en esta reunión ministerial del más alto nivel se observa que Bolsonaro solo abrió la boca para exigir a sus subordinados militancia y fidelidad política incondicional. El presidente comanda el país de la misma manera en la que construyó su figura en el escenario político: lanzando gasolina al fuego y gritando. Como diputado durante 17 años, Bolsonaro solo presentó dos proyectos de ley. Ahora está en el Gobierno, pero no para hacer gestión en la crisis.

Bolsonaro gobierna de tal manera que presiona los límites que se consideran aceptables. En los hechos, hace posible lo que se consideraba imposible. De ahí el mundo al revés y la paradoja con la izquierda, ya que la subversión del orden fue un lema de la izquierda, pero en un sentido opuesto.

Es importante señalar que durante la pandemia la izquierda institucional tampoco se mostró como una alternativa de cambio. El PT estuvo calculando qué era lo que más le convenía, en vez de trabajar por un *impeachment* para deponer a Bolsonaro. En una entrevista brindada en Europa a inicios de marzo, Lula se opuso a la destitución de Bolsonaro. En ese momento Lula dijo que era contrario a la destitución de Bolsonaro, a menos que cometiera un acto de locura o un crimen de responsabilidad. Un mes más tarde, podríamos preguntarle a Lula: “Defina locura y defina responsabilidad”.

²⁰ Ricardo Salles fue ministro de Medio Ambiente del Gobierno de Bolsonaro desde el 1 de enero de 2019 hasta el 23 de junio de 2021. Su dimisión estuvo relacionada con la apertura de dos investigaciones policiales: una por vínculos con un caso de tráfico ilegal de madera y otra por supuestamente obstruir las averiguaciones en un caso de deforestación. Véase: <https://elpais.com/internacional/2021-06-23/dimite-el-ministro-de-medio-ambiente-de-brasil-mientras-la-deforestacion-se-acelera.html>

A principios de abril había más de 20 procesos de impugnación contra Bolsonaro en la Cámara de Diputados, ninguno presentado por el PT. Este partido decidió entrar tardíamente en la campaña, y lo hizo bajo presión de sus bases, cuando la impugnación ya no era factible.

La mayor parte de los procesos de *impeachment* a Bolsonaro fueron promovidos por sus exaliados. En un Gobierno que tiene más militares que los que tuvo la dictadura brasileña, el presidente despidió a las dos figuras que podrían haberle hecho sombra: el exministro de Justicia Sergio Moro y el exministro de Salud Luiz Henrique Mandetta.

DEL BOLSONARISMO A UN “LULISMO INVERTIDO”

Criticado por la prensa, acosado por el poder judicial y por la clase dirigente y con su popularidad amenazada, Bolsonaro decidió brindar una ayuda social durante la pandemia: anunció que entregaría 600 reales (alrededor de 110 dólares) a más de 50 millones de personas. Este monto significa cuatro veces más dinero para cuatro veces más personas que la Bolsa Familia, la estrella social del lulismo. Posteriormente, rodeado por militares, anunció un plan de inversión pública masiva, ignorando la ortodoxia neoliberal. Sin embargo, la agitación política y la incertidumbre económica lo obligaron a retroceder, ratificando poderes plenos al ministro de Economía. En este momento ya se anunciaba una especie de lulismo invertido.

Seis meses después de la pandemia, a pesar de la asombrosa cantidad de muertes en Brasil, que crecían a un ritmo de más de mil por día, el país coqueteaba con una aterradora estabilidad; una estabilidad sin precedentes bajo el Gobierno de Bolsonaro, una nueva normalidad asentada sobre 100 mil muertos.

En este contexto, dos cosas quedan claras:

- A los ojos de la gente, el presidente no fue responsable por las muertes.
- La ayuda de 600 reales, cuya duración siguió prolongándose, impulsó su popularidad incluso en el noreste del país, que fue la región cautivada por la Bolsa Familia del partido petista.

Como resultado, incluso la pobreza extrema está en su nivel más bajo en los últimos 40 años. Sin embargo, es evidente que si esta ayuda se suspende, el nivel de pobreza aumentaría exponencialmente.

Mientras tanto, en Brasilia el presidente compró la fidelidad de partidos sin identidad clara y que negocian a cambio de dinero y favores. De esta manera, Bolsonaro logró apaciguar sus relaciones con el Supremo Tribunal Federal y con los grandes medios de comunicación, como la Red O’Globo.

Paradójicamente, por más que el PT se comprometiera a negociar la conciliación bajo el liderazgo de Lula con el lema “Lula, paz y amor”, el sueño burgués puede hacerse realidad con el lema “Bolsonaro, paz y amor”: paz con los medios de comunicación y con el Supremo Tribunal Federal y amor con el centro político.

En este sentido, si el exmilitar deja de lado la ideología (como lo hizo en su momento el mismo PT) y se centra en hacer “pasar el ganado”, como afirma el ministro Salles, puede ganar una reelección. Por supuesto que hay muchas dificultades; la principal es la intransigencia del ministro de Economía

con relación a la disciplina fiscal. Entonces, ¿cómo conciliar el fundamentalismo neoliberal con la renta mínima? Este es un tema central para un Gobierno que no puede prescindir de Paulo Guedes, que se considera el garante del Gobierno con las finanzas y el gran capital.

En este contexto, es poco probable un golpe de Estado. Históricamente, los golpes de Estado en América Latina fueron la respuesta a la amenaza de abajo, situación actualmente inexistente en Brasil. Más aun cuando la fachada democrática es valiosa para el neoliberalismo en Brasil y en otras partes del mundo. Bolsonaro estaría en peligro si la inestabilidad que alimenta comprometiera los negocios o si la miseria que manipula se convirtiera en rebelión; esto, por ahora no es parte del horizonte.

Por lo tanto, debemos tener cuidado para no mirar la política del siglo XXI con los ojos de la política del siglo XX. Con tres mil militares en el Gobierno, es posible que el golpe ya haya ocurrido y nosotros no nos hayamos dado cuenta.

Instituciones miembro de la Coalición regional:



Con el apoyo de:

